



**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Departamento de Derecho Público General**

**Derecho Internacional Público**

**Curso 2016 / 2017**

**LA PROTECCIÓN "MULTINIVEL" DE LOS  
DERECHOS HUMANOS:  
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS  
HUMANOS COMO PARADIGMA**

**María Marcos Figueruelo**

**Tutor: Juan Manuel Bautista Jiménez**

**Junio 2017**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Departamento de Derecho Público General**

**Derecho Internacional Público**

**LA PROTECCIÓN "MULTINIVEL"  
DE LOS DERECHOS HUMANOS:  
EL TRIBUNAL EUROPEO DE  
DERECHOS HUMANOS COMO  
PARADIGMA**

**THE "MULTILEVEL" PROTECTION  
OF HUMAN RIGHTS: THE  
EUROPEAN COURT OF HUMAN  
RIGHTS AS A PARADIGM**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objeto reflexionar sobre la eficacia de los derechos humanos en su tutela multinivel dentro del proceso de regionalización surgido en el marco del Consejo de Europa. Para ello, abordamos el estudio del sistema judicial de protección de los derechos humanos que se tramita ante el Tribunal de Estrasburgo. Además de la estructura y el funcionamiento de este órgano jurisdiccional identificamos las sentencias más relevantes en las que se ha condenado al Estado Español por vulnerar alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo.

Seguidamente analizamos la problemática de la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el verdadero talón de Aquiles cuando nos referimos a la eficacia de sus garantías. Finalizamos refiriéndonos al recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, el cauce interno adoptado en el año 2015 por el legislador español para resolver la negligencia del legislador español en este punto.

**PALABRAS CLAVE:** Sistema europeo de protección de derechos humanos; Convenio Europeo de Derechos Humanos; Tribunal Europeo de derechos humanos; tutela multinivel de derechos; ejecución de sentencias dictadas órgano supranacional.

## ABSTRACT

The aim of this research is to study the effectiveness of human rights in their multilevel protection within the regionalization process that emerged from the Council of Europe. To this end, we have studied the judicial system for the protection of human rights that is being processed at the Strasbourg Court. In addition to analyzing the structure and functioning of this international court, we have studied a number of relevant judgments in which the Spanish Kingdom has been convicted of violating any of the rights recognized in the Convention and which individuals are the holders.

We have also drawn attention to the issue of enforcement of judgments of the European Court of Human Rights which has been a weak point to take into account in the effectiveness of its guarantees. And finally we refer to the appeal of review before the Supreme Court, which is the internal channel adopted in 2015 by the Spanish legislator to enforce said Judgments.

**KEYWORDS:** Human rights, European Convention, Court of Strasbourg, multilevel guardianship of rights, Execution of sentences.

# ÍNDICE

<b>I/ INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>II/ EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS: PRECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....</b>	<b>7</b>
<b>III/ LA REGIONALIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS</b>	<b>11</b>
<b>IV/ EL SISTEMA JUDICIAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>	<b>13</b>
<b>V/ LA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>15</b>
<b>VI/ EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>18</b>
<b>VII/ LA EFICACIA DEL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA: ALGUNOS ESTUDIOS DE CASOS.....</b>	<b>20</b>
VII.1. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SENTENCIA DEL CASO BARBERÁ, MESSEGUÉ Y JABARDO CONTRA ESPAÑA .....	22
VII.2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SENTENCIA DEL CASO LÓPEZ OSTRÁ CONTRA ESPAÑA .....	25
VII.3. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SENTENCIA DEL CASO SRA. DEL RÍO PRADA CONTRA EL REINO DE ESPAÑA .....	29
<b>VIII/ EL PROBLEMA DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>32</b>
VIII.1. A TÍTULO DE EJEMPLO: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 848/2017, SALA DE LO PENAL, DE 22-II-2017 .....	35
<b>IX/ CONCLUSIONES .....</b>	<b>36</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>38</b>

## **I/ INTRODUCCIÓN**

A pesar de que la doctrina busca precedentes históricos a lo largo de la Edad Media, el reconocimiento de los derechos humanos tiene su origen a finales del siglo XVIII con las Revoluciones que permiten el surgimiento del constitucionalismo: Filadelfia en 1787 y la Revolución Francesa con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Después fueron los textos constitucionales en su parte dogmática las normas que se ocuparon de reconocer los derechos; pero el carácter político de dichas normas y el necesario desarrollo legislativo de los derechos hizo que estos no tuvieran las garantías suficientes para su eficacia.<sup>1</sup>

Las dos guerras mundiales del siglo XX pusieron de manifiesto cuan fácil era provocar situaciones devastadoras para los derechos que son el fundamento de la dignidad humana; de ahí la necesidad de abordar el problema a nivel internacional y regional. Hemos hecho en las páginas que siguen breves alusiones al papel de la ONU y nos hemos centrado en el proceso de regionalización de los derechos en Europa después de la II Guerra Mundial. Para ello hemos analizado las instituciones del Consejo de Europa haciendo especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo. Este órgano jurisdiccional de carácter internacional tiene como función principal velar por el respeto de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y sus Protocolos adicionales.<sup>2</sup>

Tanto el Convenio, firmado en Roma en 1950, como las resoluciones jurisdiccionales del precitado órgano tienen eficacia vinculante en los estados miembros del Consejo de Europa que han ratificado el Convenio. Actualmente son 47. Para llegar a conocer la eficacia de dichas resoluciones hemos estudiado no sólo la función que cumple el Tribunal de Estrasburgo sino también su organización y funcionamiento. Hemos seleccionado el estudio detenido de tres casos relevantes en los cuales el Reino de España ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber

---

1 TRUYOL y SERRA, A.: *Los derechos humanos. Declaraciones y Convenios Internacionales: Estudio Preliminar*. Ed. Tecnos, Madrid, 1984, págs. 11 y ss.

2 FERNÁNDEZ LIESA, C.: *El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica*, Ed. Civitas, Thomson Reuters. Aranzadi, 2013, págs. 323 y ss.

violado derechos de ciudadanos españoles, titulares de los mismos, que después de agotar la vía judicial interna, terminaron reclamando ante la Corte de Estrasburgo.

El objetivo de dicho análisis era poner sobre el papel la decisión del Alto Tribunal, la interpretación de los derechos reconocidos en la Convención y las razones jurídicas que le han llevado a condenar al Estado español: son los conocidos casos Barberá, Messegué y Jabardo contra España; López Ostra contra España y Sra. del Río Prada contra España.

Quizás el problema mayor que actualmente tienen las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo sea el de su ejecutoriedad en los Estados parte. Es cierto que de ellas se desprende su carácter vinculante pero hasta la fecha el Consejo de Europa no se ha preocupado de dotar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un mecanismo unificador de la ejecución de sus resoluciones judiciales; este tema ha quedado en manos del buen saber y entender de los Estados miembros. En muchas ocasiones se han dado problemas en España para ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo; la doctrina hizo sus aportaciones sobre el tema y el Tribunal Supremo, así como el Tribunal Constitucional, apostaban porque fuese el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo el cauce jurisdiccional para la ejecución de dichas Sentencias en aquellos casos de condena en los que el fallo no se cumpla voluntariamente.<sup>3</sup>

Tras las reformas legales llevadas a cabo en el año 2015, nuestro ordenamiento jurídico tiene establecido que, además de las normas generales (art. 9.1 de la Constitución Española y art. 118 de la misma norma) que proclaman la sujeción de todos a la CE y el resto del ordenamiento jurídico y la obligación de cumplir lo dispuesto en las resoluciones judiciales, haya un procedimiento concreto para poder exigir el cumplimiento de los fallos condenatorios cuando no se procede a ello de forma voluntaria: es el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo. Para ello hemos realizado el análisis de la Sentencia del TS 848/2017 de la Sala de lo Penal que nos sirve de claro paradigma para entender cómo el citado recurso extraordinario de revisión puede servir para obligar a cumplir el fallo condenatorio de una Sentencia del

---

3 RIPOLL CARULLA, S.: *El sistema europeo de protección de los derechos humanos y el Derecho Español*. Ed. Atelier, libros jurídicos, Barcelona, 2007. Del problema de la ejecución de las Sentencias se ocupa en el Capítulo III, págs. 73 y ss.

Tribunal de Estrasburgo que consideraba violado el art. 6.1 del Convenio que regula las garantías del proceso.

Terminamos la investigación con unas breves alusiones a los resultados que consideramos más relevantes en nuestro estudio y compartimos la opinión de aquel sector de la doctrina que apuesta por la necesidad de un Protocolo al Convenio de Roma en el cual se establezca un mecanismo unificado de ejecución de las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Sólo así se encontrará una buena solución al punto más débil en la protección de derechos a nivel supranacional en el proceso de regionalización europeo.<sup>4</sup>

## **II/ EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS: PRECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA**

La historia del proceso de positivación de los hoy llamados derechos fundamentales comienza en la Edad Media. El sistema poliárquico de la época hace que esos derechos se prediquen no de los individuos como tales sino en cuanto miembros de ciertos estamentos o grupos sociales. En este marco general son los documentos ingleses (Derecho estatutario) los que mejor expresan la nueva configuración de los derechos con tendencia a la universalidad: la Carta Magna de Juan sin Tierra de 1215, la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Amendment Act de 1679 y el Bill of Rights de 1689; este último es el documento británico que más se asemeja a las modernas Declaraciones de Derechos. Pero también han de ser tenidos en cuenta otra serie de documentos existentes en otros países como el Juramento de Alfonso IX ante las Cortes de León en 1188 y la Bula de Oro de Andrés II de Hungría en 1222.<sup>5</sup>

A partir del Renacimiento y hasta finales del siglo XVIII son otros los postulados que permiten entender el concepto de derechos, en el ámbito de las monarquías absolutas. Fueron el protestantismo y el iusnaturalismo las doctrinas que permitieron

---

4 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.A.: "La ejecución de las sentencias del TEDH", *Revista del Poder Judicial*, nº 15, Madrid 1990. Vid., también, FERNÁNDEZ LIESA, C., *op.cit.* págs. 123-127.

5 ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R.: "Derecho Constitucional". 6ª ed. Ed. Tecnos, 2016. Se ocupa en las págs. 243 y ss. De los orígenes históricos de los derechos fundamentales y de su proceso de conceptualización.

defender algunos aspectos de la libertad humana frente al poder político del Estado. Así pues, el discurso de los derechos humanos tal y como es entendido actualmente es un discurso de la modernidad. La primera Declaración de Derechos en sentido moderno supone una ruptura con los documentos ingleses: es la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776 que sirve de modelo a las del resto de las colonias que se independizan bajo la bandera de la Constitución de Filadelfia de 1787 y que en 1791, con las diez primeras enmiendas, vino a ligar la idea de los derechos con la propia Constitución.<sup>6</sup>

Pero, sin duda alguna, la declaración más universal de todas es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, considerada como el documento revolucionario burgués por excelencia pues su contenido material supone la aceptación de los postulados del iusnaturalismo revolucionario reconociendo derechos que corresponden a la esfera individual del individuo frente a las actuaciones de los poderes públicos. El artículo 16 de la precitada norma pone de relieve que «aquella nación que no tenga reconocidos los derechos individuales ni el principio de la división de poderes carece de Constitución». De ahí proviene la tradicional división de las Constituciones en parte orgánica y parte dogmática (donde se establecen las garantías individuales) que se viene haciendo desde finales del siglo XVIII con el nacimiento del Estado Liberal de Derecho.<sup>7</sup>

La Declaración de Derechos francesa influye a lo largo de todo el siglo XIX pero sufre a lo largo del proceso revolucionario francés dos interpretaciones distintas, una conservadora y otra progresista que anticipan la evolución del liberalismo europeo y ponen de manifiesto cómo la burguesía, en cuanto clase social dominante, quiere seguir manteniendo el poder político tras las revoluciones de mediados del siglo XVIII y para ello requiere una nueva conceptualización de los derechos.<sup>8</sup>

---

6 OSUNA PATIÑO, N.: "Apuntes sobre el concepto de derechos fundamentales", nº 37, *Temas de Derecho Público*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, págs. 8 y ss. Es muy útil la bibliografía allí citada.

7 Todos los manuales de Derecho Constitucional dedican amplios capítulos a desarrollar este tema. Puede servirnos de ejemplo PÉREZ ROYO, J.: *Derecho Constitucional*.

8 PÉREZ LUÑO, A.E.: *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, Tecnos, 9ª edición, pág. 5 y ss.



El paradigma de la igualdad en el tema de la titularidad y el ejercicio de los derechos (siglo XIX) fue deficitaria. De ahí que en los comienzos del siglo XX se reivindicuen los derechos económicos y sociales tras las reiteradas crisis del liberalismo burgués para asegurar un reparto más equitativo de los cargos y beneficios de la sociedad. Surgiendo ahí el nuevo concepto de los derechos sociales que se reconocen en las Constituciones y que plantean amplias dudas acerca de su naturaleza jurídica: ¿son auténticos derechos o se trata de normas programáticas?<sup>9</sup>

A partir de la Segunda Guerra Mundial asistimos a una nueva etapa en la conceptualización de los derechos con motivo de su proceso de internacionalización. El punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. No es un documento novedoso y plantea problemas con su naturaleza jurídica pues no es un auténtico Tratado Internacional, sino una simple Declaración con valor político. El desarrollo de la misma vino de la mano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que son auténticos Tratados con fuerza jurídica vinculante. También la Declaración Americana de Derechos y Deberes de 1948. Si nos fijamos en el modelo europeo hay que mencionar en el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de 1950, la Carta Social Europea de 1961 y la Carta Social Europea revisada en 1996 y que no ha sido todavía ratificada por España.<sup>10</sup>

La Convención Europea para la protección de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales representa un avance muy importante en relación con la Declaración Universal, puesto que se produce una mayor protección de los derechos que encuentran su máxima expresión en la institución jurisdiccional del Tribunal Europeo de Derechos humanos, que implica la creación de una verdadera legalidad de carácter supranacional. También en el marco de la Unión Europea los Tratados originarios prescindieron de un catálogo escrito de derechos fundamentales, pero no por ello carecían de protección pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendía que formaban parte de los principios generales del derecho, de las Tradiciones

---

9 PÉREZ LUÑO, A.E.: *Los derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, 2005, págs. 64 y ss.

10 CASSESE A.: *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo*, Ariel, 1993, págs. 31 y ss.

constitucionales comunes de los Estados miembros y el Convenio de Roma; luego se efectuó una configuración constitucional de los derechos que acarreó problemas en ciertas ocasiones y enfrentamientos entre el Tribunal de Luxemburgo y los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros y entre el Tribunal de Luxemburgo y el de Estrasburgo.

Un paso importante al respecto vino dado por la Carta de Niza de 2000 que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en 2007 adquiriendo plena eficacia jurídica.<sup>11</sup> Es cierto, como dicen los expertos juristas, que reconocer derechos sin establecer las correspondientes garantías es dejarlos reducidos a papel mojado. En este sentido se destaca que de entre las garantías existentes son más efectivas las de naturaleza jurisdiccional.<sup>12</sup>

En este ámbito y fijándonos en la tutela jurisdiccional de los derechos apreciamos una protección multinivel dada la existencia de tres regímenes en su protección: lo previsto en las Constituciones nacionales, en el Convenio Europeo y su tutela por el tribunal de Estrasburgo y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuya protección se le encomienda al Tribunal de Luxemburgo. Esta protección multinivel puede originar problemas jurídicos en las relaciones entre Tribunales, pues si la jurisprudencia no es coincidente el choque de trenes está asegurado. Son necesarios mecanismos para resolver conflictos y establecer un diálogo entre Tribunales. Una de las mejores soluciones, a pesar de las dificultades jurídicas existentes pasa por la ratificación del Convenio de Roma por parte de la Unión Europea y la creación de un mecanismo procesal que permita establecer un control externo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.<sup>13</sup>

---

11 GARCÍA ROCA, J.: “La evolución del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en AA.VV.: *Historia de los Derechos Humanos en el siglo XX*. Vid. del mismo autor, *El margen de apreciación nacional en la interpretación del CEDH: Soberanía e integración*. Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, 2010, págs. 108 y ss.

12 PÉREZ LUÑO, A.E.: *Los derechos fundamentales, Temas clave de la C.E.* Ed. Tecnos, Madrid 1984, págs. 53 y ss.

13 ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R.: *op. cit.* se ocupan de este tema en las págs. 142 y ss. de su obra.

### III/ LA REGIONALIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS

El proceso de regionalización en la protección de derechos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha producido tres sistemas regionales con sus propias características: el sistema europeo, el americano y el africano. Vamos a ocuparnos del primero de los citados. Ya hemos visto cómo después de la Segunda Guerra Mundial en el espacio europeo se origina una superposición de ámbitos de protección de los derechos: el sistema del Consejo de Europa, el de la Unión Europea y el nivel interno de cada Estado. Esa protección multinivel crea problemas al mismo tiempo que busca una mejor protección de los derechos humanos.<sup>14</sup>

El sistema más importante de protección europea de los derechos humanos es el del Consejo de Europa que fue resultado de la Unificación europea de posguerra y que ha sido el faro que ha guiado la evolución de las garantías de los derechos humanos en Europa desde los años cincuenta del pasado siglo XX. El Consejo de Europa es una organización internacional, de ámbito regional que tiene como objetivo promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico que sea común en el continente europeo. Ese espacio común deberá estar fundamentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley (Estado de Derecho). Fue constituido por el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949, y por ello es la más antigua de las organizaciones que tienen por objetivo la integración europea. Actualmente está compuesto por 47 países miembros que pertenecen al continente europeo entendido en su sentido más amplio. Su régimen jurídico quedó establecido en su Estatuto aprobado en 1949 por el Tratado fundacional de Londres. Para alcanzar sus objetivos y desarrollar las funciones que le han sido atribuidas, el Consejo de Europa consta de diversos órganos internos: Asamblea parlamentaria, un Comité de Ministros, y una Secretaría General, cuyas funciones se ejercen de una forma coordinada y están integradas en el marco de una mecánica institucional propia a través de la cual se organiza la voluntad de dicha institución. Por

---

14 RIPOLL, S. y otros: *España en Estrasburgo. Tres décadas bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Thomson Reuters, 2010, págs. 15 y ss.

ello el Consejo de Europa se ha dotado de instrumentos institucionales autónomos para cumplir con las funciones que el Consejo va paulatinamente incrementando.<sup>15</sup>

Sin duda alguna, el más relevante de estos organismos internacionales vinculados a dicha organización es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la trascendencia política y jurídica de la tarea que desempeña. El Consejo de Europa tiene su sede en Estrasburgo y en él hay dos idiomas oficiales (el inglés y el francés) que conviven con el uso de otras lenguas complementarias como son el alemán, el italiano y el ruso. España y Grecia costean el uso de sus correspondientes lenguas, quedando así equiparadas en la práctica con las tres lenguas complementarias. El primer acto de relevancia internacional del Consejo fue la firma en Roma, el 4 de noviembre de 1950, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en vigor desde el día 3 de septiembre de 1953. Para hacer frente a las cuestiones urgentes de naturaleza política y económica se crearon instituciones independientes, dotadas de poderes propios. El germen de la actual Unión Europea fue la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) creada en base a la idea de R. SCHUMAN.<sup>16</sup>

Si en 1949 fueron diez los Estados que firmaron el Estatuto del Consejo de Europa, en la etapa que se extiende hasta 1970 otros ocho países se adhieren al Consejo de Europa; en ese periodo se desarrollan las principales instituciones y su estructura. La Carta Social Europea se firma el 18-X-1961 y en 1960 tiene lugar la primera audiencia pública del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.<sup>17</sup>

Para poder formar parte del Consejo Europeo los Estados deben ser democráticos. De ahí que los golpes de estado en Grecia, Chipre y Turquía ocasionasen el abandono temporal de la organización por parte de estos países. La reintegración de Grecia supuso la desaparición de los últimos regímenes autoritarios de Europa occidental. Portugal ingresó en la organización en 1976, dos años después de la

---

15 FERNÁNDEZ LIESA, C.R.: *op. cit.*, págs. 323 y ss., donde se ocupa de estudiar el sistema del Consejo de Europa y la unificación a través de los derechos humanos.

16 MONTES FERNÁNDEZ, F.J.: "El Consejo de Europa", *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, vol. 47, 2014, págs. 57 y ss.

17 ROBERTSON, A.H.: *Le Conseil de l'Europe. Ses structure, ses fonctions et ses réalisations*. Leiden, Sijhoff, 1999. También ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, M.P.: "Consejo de Europa y derechos humanos: desarrollos recientes", *XVI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, Andorra, 1995.

Revolución de los Claveles y España lo hizo el 24 de noviembre de 1877, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Los cambios más significativos se produjeron cuando, el 6 de julio de 1989, M. Gorbachov acudió al Consejo de Europa para tratar sobre una nueva propuesta de desarme y discutir los derechos humanos. Rusia se adhirió al Consejo de Europa el 28-II-1996. Con la incorporación de la Federación Rusa el proyecto está integrado por más de 800 millones de personas, lo que origina que el funcionamiento del Consejo sea más complejo e inestable; siendo actualmente necesario abordar nuevos problemas en relación con la emigración, la corrupción, obtención de la nacionalidad, exclusión social, minorías...<sup>18</sup>

El marco institucional del Consejo de Europa está conformado por: la Secretaría General, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Congreso de los Poderes Locales y Regionales, el Comisario de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creado en 1950 y cuyo mecanismo dual de protección fue sustituido el 1-XI-1998 por un Tribunal Único que opera en el Palacio Europeo de Derechos Humanos inaugurado en junio de 1995.

#### **IV/ EL SISTEMA JUDICIAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales se firmó en Roma en noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, después de haber sido ratificado por diez Estados. Actualmente son 47 los Estados Miembros del Consejo de Europa que son parte de dicho Convenio. Su proceso de elaboración no fue fácil y a lo largo de las negociaciones se plantearon cuestiones referentes al catálogo de derechos que debían estar reconocidos, y además al hecho de que si los derechos sólo deberían ser enumerado, o por el contrario serían objeto de una definición detallada. Desde un principio se tuvo clara la naturaleza selectiva del Convenio que concentraría sus esfuerzos en aquellos derechos mínimos que son absolutamente indispensables para determinar los principios cardinales del funcionamiento de la democracia política (ello obligó a no reconocer derechos de

---

18 MARTÍN RETORTILLO, L.: *La Europa de los derechos humanos*, CEPyC, Madrid, 1998. Dedicar las págs. 27-63 a estudiar las bases de la Europa de los derechos humanos y su órgano jurisdiccional garantizador.

carácter social). Así, el resultado final del catálogo de derechos y libertades incluido en el texto aprobado por el Comité de Ministros en junio de 1950 ya viene a coincidir con la versión definitiva del CEDH: derecho a la vida (art. 2); prohibición de la tortura (art. 3); prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4); derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5); derecho a un proceso equitativo (art. 6); no hay pena sin ley (art. 7); derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8); libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9); libertad de expresión (art. 10); libertad de reunión y asociación (art. 11); derecho a contraer matrimonio (art. 12); derecho a un recurso efectivo (art. 13); prohibición de discriminación (art. 14); prohibición del abuso de derecho (art. 17).<sup>19</sup>

Del contenido de la Convención en su sentido general cabe realizar una distinción, en base a los debates de cara a su aprobación, entre los derechos plenos y autónomos contenidos en los arts. 2 al 12 y otros derechos no autónomos que actúan de tal modo que sirven de protección a los plenos derechos. Estos serían: el derecho a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales en el caso de violación de los derechos fundamentales (art. 13); la prohibición de discriminación (art. 14); y la prohibición del abuso del derecho (art. 17).

Hay que destacar también que el contenido mínimo del catálogo de derechos protegido por la Convención se ha visto progresivamente ampliado a través de la aprobación de sucesivos protocolos adicionales cuyo contenido consiste en la protección de nuevos derechos y libertades. Así, el contenido del Convenio de Roma se vio ampliado con los derechos a la propiedad privada, a la instrucción, a la celebración periódica de elecciones, la abolición de la pena de muerte, prohibición de prisión por deudas, libertad de circulación, prohibición de la expulsión de los nacionales, prohibición de las expulsiones colectivas de los extranjeros y las garantías correspondientes en su caso, derecho al doble grado en la jurisdicción penal, derecho a

---

19 RIPOLL CARULLA, S.: "El sistema europeo...", *op. cit.* Dedicar las págs. 20 y ss. a estudiar el catálogo de derechos y libertades reconocidos en el Convenio.

indemnización en el caso de error judicial, derecho a no ser juzgado y penado dos veces por el mismo delito, igualdad entre los esposos, prohibición de la discriminación...<sup>20</sup>

El Programa de Derechos Humanos del Consejo de Europa se completa con la firma de otros Tratados de protección de Derechos Humanos como la Carta Social Europea (1961), el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos Inhumanos o Degradantes (1989), la Convención marco para la protección de las minorías nacionales (1995)... Estos Convenios cuentan en muchos casos con su propio órgano de control internacional como el Comité Europeo de Derechos Sociales o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. A ellos se añade la figura del Comisario de Derechos Humanos creado en 1999, para promover la educación y la sensibilización en los derechos humanos, así como también para proteger su respeto y velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Consejo de Europa.<sup>21</sup>

## **V/ LA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS**

Sin duda alguna es la institución que mejor caracteriza al Convenio de Roma; se trata de un mecanismo de control jurisdiccional que era reclamado desde los primeros momentos de los trabajos preparatorios de la Convención. Predominaba la idea de crear un Tribunal como órgano singular que entre sus competencias tuviese la capacidad de aplicar sanciones en los casos de que no se respetase el catálogo de derechos humanos. En un principio el sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio de Roma de 1950 le correspondía a tres instituciones: la Comisión Europea, el Tribunal Europeo y el Comité de Ministros del Consejo de Europa.<sup>22</sup>

La estructura previamente descrita se fue modificando en sucesivas ocasiones hasta que se adoptó el Protocolo Adicional nº 11 al Convenio. Este Protocolo que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998 establece un único órgano, que sustituye a la Comisión y al Tribunal anterior, que tiene carácter permanente y tiene jurisdicción

---

20 CASSIN, R.: "La Déclaration universelle et la mise en œuvre des Droits de l'homme". *RCADI*, vol. 79, pág. 241 y ss. También DÍAZ CREGO, M. en la obra colectiva ", (GARCÍA ROCA y SANTOLAYA, coord.), Madrid , CEPyC, 2005, pág. 897 y ss.

21 RIPOLL CARULLA, S.: "El sistema europeo...". *op. cit.*, págs. 26 y ss.

22 FERNÁNDEZ LIESA, C.R.: "El derecho internacional...", *op. cit.*, págs. 329 y ss.

obligatoria en todos los asuntos que tengan que ver con la interpretación y la aplicación del Convenio. Además su jurisdicción es exclusiva porque las competencias del Comité de Ministros actualmente quedan reducidas a controlar la ejecución de sus Sentencias.

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, ha manifestado de forma reiterada que su función principal consiste en realizar una interpretación dinámica del Convenio Europeo de Derechos Humanos con el objetivo de que sea un instrumento garantizador de los derechos humanos a tenor de las necesidades de la sociedad actual. Han sido las demandas presentadas a título individual por los titulares de los derechos contenidos en el Convenio las que han provocado que la función del Tribunal de Estrasburgo superase las expectativas de los redactores del Convenio de Roma y han conseguido convertir a la institución en un órgano jurisdiccional que ha implementado el significado de un texto normativo que en principio podía considerarse inmutable.<sup>23</sup>

Los actores de esta jurisprudencia expansiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son los ciudadanos sujetos a la jurisdicción de los Estados parte que están legitimados para presentar las correspondientes demandas. De aquí se han derivado funciones cuasiconstitucionales por parte de esta institución que establece (como hacen los Tribunales Constitucionales) estándares de protección en el diario ejercicio de los derechos fundamentales. Esta función no estaba prevista en el Convenio de Roma y se ha ido creando con las acciones juzgadoras que a diario realiza dicha institución.

La doctrina insiste en reconocer la tarea creadora del Tribunal de Estrasburgo; labor que también asume el propio Tribunal cuando le reconoce al Convenio la naturaleza de instrumento constitucional del orden público europeo en el ámbito de los derechos humanos, no dudando en compararse en algunas de sus acciones a las que realizan los propios Tribunales Constitucionales. Entre ellas destacan la función de interpretación conforme del Convenio y el establecimiento de estándares de protección y la promoción de la defensa de los derechos contenidos en el Convenio incluyendo en los razonamientos de las sentencias nuevos desafíos para la evolución del contenido de

---

23 RUILOBA ALVARIÑO, J.: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: organización y funcionamiento". *UNED. Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica*, nº 1.



los derechos en los Estados parte. Lo que no puede hacer el Tribunal de Estrasburgo, porque es un Tribunal internacional, es anular leyes estatales aunque las considere inconstitucionales.<sup>24</sup>

También se destaca por parte de la doctrina cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ejercido controles sobre sentencias de los Tribunales Constitucionales de ciertos países como Austria, Alemania o España; y lo ha hecho en base al contenido del art. 6 del Convenio que contiene el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o a una tutela judicial efectiva. Pueden servir de ejemplo para el caso español la Sentencia Díaz Aparicio contra España de 2001 o el asunto Ruiz Mateos contra España de 1993 en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla el contenido del principio de igualdad de armas en la defensa de las partes en el ámbito de los procesos constitucionales.

En relación con lo que antes hemos expuesto se puede defender que ninguna jurisdicción interna (tampoco de los Tribunales Constitucionales) escapa al control de los órganos establecidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por eso no puede sorprender que cuando se ha planteado un conflicto normativo entre el Convenio de Roma y las normas internas de un Estado parte, el Tribunal ha hecho prevalecer el Convenio frente a las Constituciones nacionales incluso en la interpretación que le han dado los Tribunales Constitucionales. Por ello es acertado defender que en el ámbito de los derechos humanos el Tribunal de Estrasburgo ha realizado un papel parecido al de un Tribunal Constitucional Europeo cuyo canon de referencia es el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.<sup>25</sup>

Ahora bien, todos los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos son Estados de Derecho y asumen entre sus fundamentos básicos el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Conciliar esta realidad con el control cuasiconstitucional llevado a cabo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es fácil dados los problemas –que luego veremos–

---

24 MORTE GÓMEZ, C.: *El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los requisitos de admisibilidad de la demanda*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 18 y ss.

25 AA.VV. *La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole n° 11*, Bruylant, Bruxelles, 1999.

de las relaciones entre el Tribunal de Estrasburgo y los órganos jurisdiccionales de los Estados partes.<sup>26</sup>

## **VI/ EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos que también se denomina Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales en toda Europa. Es un Tribunal de carácter internacional ante el cual cualquier persona puede presentar una denuncia por violación de sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en cualquiera de sus Protocolos adicionales. El derecho en cuestión debe haber sido vulnerado por un Estado miembro del Consejo de Europa y previamente es requisito indispensable haber agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en dicho Estado.<sup>27</sup>

El Convenio de Roma firmado en 1950 es un Tratado Internacional por el cual los 47 Estados miembros del Consejo de Europa han acordado comprometerse en proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer un Tribunal y someterse a su jurisdicción, acatando y ejecutando sus sentencias. La ejecución de dichas Sentencias por los Estados miembros que han sido condenados está supervisado por el Comité de Ministros, que es un órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro.

Este órgano del Consejo de Europa nació jurídicamente el día 3-IX-1953 y fue objeto de renovación el día 1-XI-1998 cuando entró en vigor el Protocolo nº 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Con base en el Convenio de Roma previamente existió un sistema mixto, compuesto por un Tribunal y una Comisión, pero su existencia terminó el día 31-X-1998. Gracias

---

26 RIPOLL CARULLA, S.: "El sistema europeo de protección...", *op. cit.*, págs. 33 y ss.

27 RUILOBA ALVARIÑO, J.: "El Tribunal Europeo...", *op. cit.*, págs. 1 y ss.

al Protocolo nº 11 la Comisión siguió funcionando un año más para instruir los casos que dicho órgano había admitido antes de la entrada en vigor del Protocolo.<sup>28</sup>

El Tribunal está compuesto por un número de Jueces igual al de las Altas Partes Contratantes –a día de hoy son 47– por un periodo de nueve años y no son reelegibles. El Pleno del Tribunal elige a su Presidente y a uno o dos vicepresidentes por un periodo de tres años; pueden ser reelegidos. Los dos vicepresidentes presiden también una sección de las cinco en que se divide el Tribunal. Un presidente presidirá cada sección que tiene tres años de duración y en cada una se constituyen comités de tres jueces que duran doce meses en el cargo y realizan la labor de filtrado de los asuntos (tarea que antes era realizada por la Comisión). También en cada sección hay Salas de siete miembros, de carácter rotatorio. La gran Sala, que consta de 17 jueces, se constituye para una duración de tres años. Son miembros de oficio el Presidente, los Vicepresidentes y el Presidente de Sección. Además a ella pertenecen otros miembros mediante el sistema de rotación de dos grupos, que se alternarán cada nueve meses y cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico para reflejare los diferentes tradiciones jurídicas de los Estados parte.

Los jueces del Tribunal de Estrasburgo los elige la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría, de entre una terna que presenta cada Estado miembro del Consejo de Europa. El artículo 22 del Convenio exige que sean juristas prestigiosos, de alta consideración moral y además deben reunir las condiciones exigidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. Antes de la toma de posesión de su cargo los jueces han de prestar juramento (según el art. 3 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) en la primera sesión en la que el Tribunal se reúna en Pleno y el juez se halle presente y si es necesario la hará ante el Presidente del Tribunal. La duración en el cargo es de nueve años, no son reelegidos y finaliza su mandato al cumplir la edad de 70 años.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá juzgar aquellas presuntas violaciones de derechos humanos que cumplan los requisitos que a continuación señalamos: la violación de los derechos humanos tiene que haber sido sufrida en el

---

28 *Op. cit.*, págs. 4 y ss.

territorio de los Estados que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la demanda se tiene que alegar y justificar de forma adecuada la infracción de alguno de los derechos reconocidos en dicho Convenio y sólo serán perseguidos los hechos que han tenido lugar después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de que se trate; pero la demanda únicamente podrá ser presentada si dicho Estado ha aceptado la competencia del Tribunal de Estrasburgo. La legitimación activa le corresponde a los Estados y a cualquier persona física, jurídica, ONG o grupo de particulares, al margen de su nacionalidad, residencia o estado civil, que hayan sido directamente afectados. La legitimación pasiva la tienen los Estados que hayan ratificado el Convenio, pues el acto lesivo debe ser responsabilidad del Estado, es decir, cometido por alguna Administración o agente que dependa de dicho Estado. No se pueden demandar actos por violaciones de derechos cometidas por una persona física o jurídica privada.<sup>29</sup>

La desestimación de la demanda por parte del TEDH cabe cuando no se cumplen los siguientes requisitos: que no se haya respetado el plazo de los seis meses a contar desde la última decisión interna pronunciada en el Estado parte frente a quien se actúa (art. 35 del Reglamento). La demanda no puede ser presentada si previamente ya se presentó ante el Tribunal de Estrasburgo o ante otra instancia internacional y su contenido sigue siendo el mismo porque no se han producido hechos nuevos que justifiquen el nuevo conocimiento del caso. También es requisito indispensable haber agotado todas las instancias jurisdiccionales ordinarias existentes en el sistema judicial interno del Estado presuntamente infractor. No se exigen las discrecionales o extraordinarias, pero en el caso español sí se exige el agotamiento del recurso de amparo. Se exceptúan los casos de dilaciones indebidas, aunque éstas deben ser justificadas; y también se exige haber alegado la infracción en la vía judicial interna siempre que ello sea posible. Esta es una exigencia de carácter flexible que no debe impedir el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la fundamentación de la demanda se debe invocar algún artículo del Convenio y si ello es posible haber alegado la infracción desde el inicio del proceso en vía interna; la demanda debe estar

---

29 MORTE GÓMEZ, C.: *op. cit.*, págs. 18-20.

bien fundamentada jurídicamente y no ser abusiva. Incluso se requiere que el perjuicio derivado de la violación del derecho contenido en el Convenio debe ser relevante.<sup>30</sup>

## **VII/ LA EFICACIA DEL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA: ALGUNOS ESTUDIOS DE CASOS**

España se incorporó al sistema del Convenio Europeo de protección de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales del Consejo de Europa de forma temprana, tras la muerte de Franco; esta incorporación se adelantó en varios años al ingreso en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. La recepción del sistema implicó la aceptación del Convenio (con algunas reservas o matizaciones) que pasó a hacer parte del ordenamiento jurídico español, con el plus de eficacia que se deriva de la aplicación del artículo 10.2 de la Constitución Española) que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos y su eficacia a nivel interno). Quizás lo más destacado de esta incorporación fue la aceptación expresa de la reclamación individual que permitía acceder a la Comisión Europea de Derechos Humanos y, en su caso, al Tribunal de Estrasburgo.

El Convenio de Roma se firmó en 1950 y tras la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978 se ratificó el Convenio por Instrumento de 26 de septiembre de 1979. En este momento España anunció su intención de formular la declaración prevista en el artículo 25 del Convenio tan pronto lo permitiera el desarrollo legislativo español. Esto se realizó el 11 de junio de 1981, surtiendo efectos a partir de julio del mismo año. Ello significa que cualquier ciudadano u organización no gubernamental podía dirigirse a la Comisión Europea de Derechos Humanos si entiende haber sufrido violación por parte del Reino de España de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma. Por su parte, si estima acertada la solicitud la Comisión podía residenciar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión desapareció con la entrada en vigor del Protocolo nº 11 y ahora los titulares de los derechos vulnerados pueden acceder directamente al Tribunal de Estrasburgo.<sup>31</sup>

---

30 PÉREZ MANZANO, M.: "El TC ante la tutela multinivel de derechos fundamentales en Europa", *REDC*, nº 95, Madrid, 2012, págs. 311 y ss.

31 RUILOBA ALVARIÑO, J.: *Op. cit.*, págs. 1 y ss.

Con la intención de pasar de los planteamientos teóricos a la realidad práctica en las páginas que siguen nos ocuparemos de analizar tres casos de relevancia en los cuales el Reino de España ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a causa de la violación de algunos derechos contenidos en el Convenio de Roma: se trata de la Sentencia 10590/83, caso Barberá, Messegué y Jabardo contra España; la Sentencia 16778/90, caso López Ostra contra España y el caso Inés del Río Prada contra el Reino de España y que finalizó con la Sentencia de 21 de octubre de 2013.<sup>32</sup>

### **VII.1. Consideraciones en torno a la Sentencia del caso Barberá, Messegué y Jabardo contra España**

La Comisión Europea de Derechos Humanos y el Gobierno Español sometieron el caso al Tribunal de Estrasburgo en diciembre de 1986 y en enero de 1987, respectivamente, en el plazo de tres meses que exige el procedimiento establecido en el Convenio de Roma. El caso comenzó con la presentación de tres demandas en 1983, dirigidas contra el reino de España y presentadas por los ciudadanos españoles, señores Barberá, Messegué y Jabardo, con la pretensión de que se resolviera si los hechos denunciados suponen que el Estado español demandado había incurrido en la violación del artículo 6.1 del Convenio que contiene el derecho a un proceso equitativo, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los tres recurrentes; los señores Barberá y Messegué cumplían pena privativa de libertad y el señor Jabardo residía en la provincia de Barcelona. Los tres habían sido condenados por el atentado que costó la vida al señor Bultó, empresario catalán, en mayo de 1977.

Los demandantes habían sido detenidos en octubre de 1980 y fueron acusados de pertenencia a la organización terrorista EPOCA. Se les aplicó la legislación sobre

---

32 Para los elementales comentarios de las tres Sentencias del TEDH que hemos seleccionado nos hemos apoyado en la lectura y resumen de dichas sentencias, en su traducción al español y en los comentarios que sobre las mismas ha realizado RIPOLL CARULLA, S.: *El sistema europeo de protección...op. cit.* que en las págs. 116 y ss. se ocupa de estudiar la adopción de medidas generales de ejecución de sentencias condenatorias del TEDH. También hemos consultado el trabajo de FIGUERUELO BURRIEZA, Á.: "Diálogo entre Tribunales: la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21-X-2013 (caso Sra. Del Río Prada contra el reino de España) en *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, nº 23, 2014, págs. 107 y ss.

represión del terrorismo y durante su detención gubernativa firmaron un atestado reconociendo su participación como autores o como cómplices en el asesinato del señor Bultó. En su comparecencia ante el Juez de Instrucción que les interrogó no estuvo presente un abogado defensor y se retractaron de sus confesiones ante la policía quejándose de torturas físicas y morales durante su detención gubernativa. Terminado el procedimiento de instrucción los autos se remitieron a la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que es el órgano competente para conocer del delito. El juicio se celebró el 12 de enero de 1982, en una sala con grandes medidas de seguridad dada la gravedad del delito. El Tribunal aceptó la incorporación a los autos de los documentos presentados por la defensa y los acusados negaron cualquier participación en el asesinato y de nuevo se quejaron de las torturas sufridas durante su detención gubernativa.

En enero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a los señores Barberá y Messegué a treinta años de reclusión mayor como autores del asesinato del señor Bultó y el señor Jabardo fue condenado como cómplice de un asesinato a doce años y un día de reclusión menor. Los demandantes recurrieron en casación al Tribunal Supremo invocando la violación de los artículos 14, 17 y 24 de la Constitución Española. Destacaban, en relación a las circunstancias de su detención y prisión, que cuando les interrogó la policía no contaron con la asistencia de abogados y no se les informó de sus derechos. Además, sus confesiones se debieron a la coacción, las amenazas y los malos tratos; incluso alegaban que su presunción de inocencia no había sido desvirtuada por ninguna de las pruebas puesto que la violencia física sufrida anulaba sus confesiones. En diciembre de 1982 el Tribunal Supremo desestimó los recursos de los señores Barberá y Messegué tanto en lo referente a la irregularidad formal del proceso como a lo relacionado con la presunción de inocencia; en cambio el Tribunal Supremo sí casó la Sentencia de la Audiencia Nacional respecto al señor Jabardo pues estimó que su colaboración en el caso constituía delito de colaboración con banda armada. También confirmó que la Ley de Amnistía no era aplicable a los demandantes y ordenó que se investigara el tema de los malos tratos que había denunciado.

Los tres condenados acudieron al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo por violación de los artículos 17.3, 24.2 y 14 de la norma suprema. El Tribunal Constitucional, en abril de 1983, declaró inadmisibile el recurso de amparo

por falta manifiesta de fundamento. Sobre el tema de la presunción de inocencia el correspondiente Auto del Tribunal Constitucional señaló que la apreciación de las pruebas es competencia de los Tribunales ordinarios y que el Alto Tribunal no puede revisar la valoración de las pruebas que han realizado los Tribunales penales. Agotada la vía judicial interna tras el Auto del Tribunal Constitucional, los señores Barberá, Messegué y Jabardo presentaron demandas con fecha 22 de julio de 1983 ante la Comisión. Se quejaban de que no contaron con un proceso justo ante un Tribunal independiente e imparcial y afirmaban que fueron condenados únicamente con las pruebas de las confesiones que se les arrancaron mediante tortura (artículo 6, apartados 1 y 2 del Convenio). También destacaban que durante su detención gubernativa sufrieron malos tratos incompatibles con el artículo 3 del Convenio, denunciando la violación de los artículos 5.1, 8.1 y 9.1 de dicho Convenio. La Comisión ordenó la acumulación de las tres demandas y las admitió a trámite el 11 de octubre de 1985 en lo referente a las reclamaciones del artículo 6 apartados 1 y 2 del Convenio y las declaró inadmisibles en todo lo demás. En su informe de 16 de octubre de 1986 llegó a la conclusión por unanimidad de que se había infringido el artículo 6.1 del Convenio y opinó por doce votos a favor, ninguno en contra y una abstención que no procedía estudiar por separado las reclamaciones de los demandantes sobre el artículo 6.2 del Convenio.

En las Conclusiones presentadas al Tribunal de Estrasburgo, en mayo de 1987, los demandantes piden al Tribunal que declare que España violó el artículo 6.1 del Convenio, porque se ha desconocido el derecho a contar con un proceso justo. En el caso de que no se resuelva en este sentido piden también que se falle sobre el artículo 6.2 por haber sido condenados sin ninguna prueba. Por su parte el Gobierno en su correspondiente memoria le pide al Tribunal que examine el procedimiento en su conjunto, no de forma aislada y que se pronuncia sobre las excepciones de no haber agotado los recursos internos opuestos y también que declare que España no ha violado el artículo 6 apartados 1 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal, en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia, se ocupa del contenido del artículo 6.1 del Convenio a cuya luz estudia la imparcialidad de la Audiencia Nacional, el cambio en la composición del Tribunal sin aviso previo, las quejas sobre el Presidente sustituto y el derecho a un proceso justo. También analiza la



excepción previa del Gobierno de que no se agotaron las vías de los recursos internos desestimando en su totalidad dichas excepciones previas. Por lo que se refiere al fundamento de los agravios alegados por los demandantes se estudia el traslado de los acusados a Madrid desde Barcelona, la sustitución del Presidente y de otro Magistrado, el desarrollo del juicio y la práctica de las pruebas (interrogatorio de los acusados, el examen de los testigos, la prueba documental) y se llega a la Conclusión de que debido al traslado tardío de los demandantes de Barcelona a Madrid, al cambio en la composición del Tribunal justo antes del comienzo del juicio, la brevedad de las sesiones del juicio y teniendo en cuenta que no se practicaron pruebas muy importantes en presencia de los acusados y de forma pública llega a la conclusión de que el procedimiento controvertido no ha cumplido con las exigencias de un proceso justo y público, incurriendo en la violación del artículo 6.1 del Convenio. Respecto al derecho a la presunción de inocencia del artículo 6.2 del Convenio el Tribunal de Estrasburgo concluye señalando que no se ha producido tal violación porque no resulta de los Autos que la Audiencia Nacional o el Magistrado que la presidía hayan tomado, durante el procedimiento y especialmente en el juicio oral, resoluciones o actitudes que así lo pusieran de manifiesto.

En base a lo antes señalado el Tribunal de Estrasburgo rechazó por unanimidad la excepción del Gobierno de que no se agotaron los recursos internos y falló por unanimidad que los demandantes no agotaron la vía de los recursos internos en sus quejas sobre el Presidente sustituto de la Audiencia Nacional. Rechaza, también por unanimidad, la excepción de que no se agotaron los recursos internos, opuesta por el Gobierno por no haber pedido los demandantes a la Audiencia Nacional que aplazase las sesiones del juicio. Y falla por diez votos contra ocho que se violó el artículo 6.1 del Convenio. Los Magistrados disidentes formularon el correspondiente voto particular a la Sentencia mayoritaria. También falla por unanimidad que el artículo 50 del Convenio que versa sobre la posible acción de indemnización que los demandantes pueden entablar frente al Estado Español si el Tribunal apreciaba la correspondiente vulneración no está en condiciones de resolverse; por ello la reserva totalmente y pide al Gobierno y a los demandantes que le dirijan por escrito, en el plazo de seis meses, los acuerdos a los que lleguen en esta materia. También se reserva el procedimiento posterior y delega en el Presidente la facultad de establecerlo si fuera necesario. El voto particular de los Magistrados discrepantes, tras analizar pormenorizadamente las quejas

formuladas sobre el traslado tardío de los acusados a Madrid, sobre el cambio en la composición del Tribunal al comienzo de las sesiones del juicio, y el desarrollo de dichas sesiones, entienden que el procedimiento de que se trata atendió a las exigencias de la publicidad y en conclusión, aprecian que no se violó el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

## **VII.2. Consideraciones en torno a la Sentencia del caso López Ostra contra España**

El caso fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1993 cumpliendo los plazos procedimentales fijados en el Convenio. Su origen se halla en un recurso dirigido contra el Reino de España que una ciudadana española, Sra. López Ostra, había sometido a la Comisión en mayo de 1990 con base en el artículo 25 del Convenio de Roma. La finalidad del recurso era obtener una resolución que se pronunciase en torno a los hechos de la causa que, en opinión de la demandante, suponen una violación de los artículos 3 y 8 del Convenio.

En resumen, los hechos denunciados por la parte actora que residía en la ciudad de Lorca (Murcia) son los siguientes: la ciudad de Lorca tiene muchas industrias relacionadas con el cuero y en consecuencia, plantas depuradoras de aguas y residuo, una de las cuales, construida en terrenos municipales, se encontraba a doce metros del domicilio de la recurrente. La planta comenzó a funcionar en 1988 sin haber obtenido la licencia de la alcaldía y sin seguir el procedimiento establecido para ello. Su puesta en marcha, debido a su mal funcionamiento, provocó serios problemas de salud a muchos habitantes de Lorca y en especial a los del barrio de la actora. Los habitantes de dicho barrio fueron realojados temporalmente por el Ayuntamiento y la planta vio parcialmente interrumpidas sus actividades debido a las numerosas quejas recibidas. Los informes periciales y los testimonios escritos de los años siguientes ponen de relieve que las molestias para poner en peligro la salud de los vecinos seguían persistiendo.

Al no encontrar satisfacción a sus reclamaciones ante el Ayuntamiento de Lorca la Sra. López Ostra interpuso en octubre de 1988 un recurso ante la Sala de lo

Administrativo de la Audiencia Territorial de Murcia, para proteger sus derechos fundamentales, por la vía reconocida en la Ley 62/1978 –que regulaba provisionalmente el amparo ordinario del artículo 53.2 de la Constitución Española–. Se quejaba de la violación de los derechos contenidos en los artículos 15, 17.1, 18.2 y 19 de la Constitución debido a la pasividad del Ayuntamiento ante las molestias y riesgos provocados por la planta depuradora. El recurso fue desestimado por la Audiencia Territorial con fecha 31 de enero de 1989; en su opinión las molestias causadas por la planta depuradora no constituían un riesgo grave para la salud de las familias que allí vivían y el deterioro de su calidad de vida no alcanzaba los niveles de llegar a violar los derechos fundamentales reivindicados.

Con fecha 10 de febrero de 1989 la Sra. López Ostra interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Supremo frente a la Sentencia de la Audiencia Territorial de Murcia. El Tribunal Supremo, con fecha 27 de julio de 1989, rechazó la apelación a pesar de las conclusiones presentadas por el fiscal del Tribunal Supremo. Ante la respuesta negativa a su demanda por parte del Alto Tribunal la Sra. López Ostra presentó un recuso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando violación de los artículos 15 (derecho a la integridad física), 18 (derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio familiar) y 19 (derecho a elegir libremente el propio domicilio). Todos ellos reconocidos en la Constitución Española vigente. El Tribunal Constitucional, con fecha 26 de febrero de 1990, declaró inadmisibile el recurso de amparo por falta manifiesta de fundamento. Estimaba que la existencia de humos, olores y ruidos no constituía infracción de la inviolabilidad del domicilio y que la vida y la integridad física de la actora no corrían peligro; tampoco se había lesionado su derecho a elegir domicilio puesto que ninguna autoridad la había expulsado de su casa.

La Sra. López Ostra sometió el asunto a la Comisión el 14 de mayo de 1990, quejándose de la inactividad de las autoridades municipales de Lorca ante las molestias provocadas por una planta depuradora instalada a unos metros de su casa. Invocaba la violación de los artículos 8.1 y 3 del Convenio considerándose víctima de una violación del derecho al respeto de su domicilio que dificultaba su vida privada y familiar, así como de un trato degradante. La Comisión admitió el recurso el 31 de agosto de 1993, concluyendo por unanimidad que hubo infracción del artículo 8 del Convenio, pero no del artículo 3. En sus Fundamentos de Derecho el Tribunal rechazó las excepciones del

Gobierno de España referentes a la falta de agotamiento de las vías de recurso internas y a la falta de legitimidad de la víctima.

La demandante alega en primer lugar una infracción del artículo 8 del Convenio que reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Al respecto la actora criticaba la situación prolongada debido a la inactividad del Ayuntamiento y de las demás autoridades competentes. Incluso, a partir del cese parcial de las actividades de la planta en septiembre de 1988, ésta siguió emitiendo humos, ruidos repetitivos y fuertes olores que hicieron insoportable las condiciones de vida de su familia y les provocaron problemas serios de salud. Por ello alegaba una infracción del derecho al respeto de su domicilio. Tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia, basándose en informes aportados por los peritos y por el Gobierno español, apreciaron que las emanaciones de sulfuro de hidrógeno provenientes de la planta rebasaban el umbral autorizado y suponían un peligro para los habitantes de las viviendas próximas; existía, pues, un nexo de causalidad entre las emanaciones y los problemas de salud que padecía la hija de la actora. Insiste el Tribunal en que los daños graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio de tal modo que su vida privada y familiar se vea perjudicada (aunque no se ponga en peligro grave la salud de la interesada). La actora insiste en su demanda en que los poderes de policía tribuidos a las autoridades municipales no se ejercieron porque la planta no reunía las condiciones que exigía la ley respecto a su emplazamiento y licencia municipal.

Y que de acuerdo con su jurisprudencia el Tribunal de Estrasburgo mantiene que la aplicación del derecho interno incumbe en primer lugar a las autoridades y jueces nacionales. Y en este caso las autoridades españolas no adoptaron las medidas necesarias para proteger el derecho de la actora al respeto de su vida privada y familiar garantizado por el artículo 8 del Convenio. Y, además de no actuar, se opusieron a las decisiones judiciales en ese sentido. Otros organismos del Estado también contribuyeron a prolongar la situación y por ello los interesados tuvieron que sufrir durante más de tres años las molestias causadas por la planta depuradora antes de cambiar de domicilio.

En base a todo lo anterior el Tribunal estimó que el Estado español no supo encontrar un justo equilibrio entre el interés del bienestar de la ciudad de Lorca y el disfrute efectivo por la parte actora del derecho al respeto de su domicilio y de su vida privada y familiar. En consecuencia hubo infracción del artículo 8 del Convenio. En cambio no se aprecia vulneración del artículo 3 del Convenio porque los hechos que se reprochan al Estado español no pueden ser considerados como torturas o tratos inhumanos o degradantes.

En aplicación del artículo 50 del Convenio como la decisión condenatoria del Tribunal al Estado español sólo permite satisfacer el derecho violado de los reclamantes de forma imperfecta, la parte lesionada puede ser satisfecha mediante una indemnización por daños y el pago de las costas y los gastos. El Gobierno español y el Tribunal de Estrasburgo consideraron excesiva la cantidad económica reclamada por la Sra. López Ostra pero admiten su derecho a ser indemnizada en equidad por los daños morales sufridos y por el estado de salud degradado de su hija. Por todo ello el Tribunal rechazó las excepciones preliminares del Gobierno español. Declaró por ocho votos contra uno que hubo infracción del artículo 8 del Convenio y que no hubo infracción del artículo 3 de dicha norma. Declaró, además, que el Estado español tenía que abonar en el plazo de tres meses a la actora cuatro millones de pesetas en concepto de daños y un millón quinientas mil pesetas menos nueve mil setecientos francos franceses a modo de costas y gastos. Por último, en su fallo el Tribunal rechazó la satisfacción en equidad por el exceso.

### **VII.3. Consideraciones en torno a la Sentencia del caso Sra. del Río Prada contra el Reino de España**

El día 3 de agosto del año 2009 la ciudadana española Sra. del Río Prada presentó el recurso nº 42.750/09 contra el Reino de España ante el TEDH. La demanda fue asignada a la Sección Tercera de la Corte de Estrasburgo que notificó la demanda al Gobierno español el 19 de noviembre de 2009.

Con fecha 10 de julio de 2012 la Sala de dicha Sección dictó sentencia en la cual se reconoció que habían sido violados los artículos 7 y 5.1 del Convenio de Roma que

regulan, respectivamente, el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad y a la seguridad. Con fecha 4 de octubre de 2012 el TEDH recibió una solicitud del Gobierno de España para que el caso fuera remitido a la Gran Sala. Ésta, con fecha 21 de octubre de 2013, pronunció Sentencia definitiva en la cual mantiene: "por quince votos contra dos, que se ha violado el artículo 7 de la Convención; declara por unanimidad que se ha violado el art. 5.1 de la Convención porque desde el día 3 de julio de 2008 hasta la fecha la detención de la demandante ha sido ilegal. Declara, por dieciséis votos contra uno, que España en cuanto Estado demandado debe garantizar que la solicitante sea liberada a la mayor brevedad posible. También declara, por diez votos contra siete, que el Estado demandado debe abonar a la demandante 30.000 euros en concepto de daño inmaterial. Y sostiene por unanimidad que España debe abonar a la demandante 1.500 euros en concepto de gastos y costas".

Cuando la demandante acudió al TEDH había agotado la vía de los recursos internos (art. 45 del Convenio de Roma) y no habían transcurrido los seis meses a partir de la fecha de la resolución interna recaída definitivamente. Se recurre una providencia del Tribunal Constitucional español que declaró inadmisibile el recurso de amparo (febrero de 2009) por considerar que la demandante no había demostrado la relevancia constitucional de su petición al Tribunal Constitucional. Alegaba violados el art. 14, el 17, el 24 y el 25 de la Constitución Española; respectivamente se trataba de la prohibición de discriminación del derecho a la libertad y a la seguridad del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de legalidad. Todos ellos también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La mayor trascendencia de esta Sentencia del Tribunal de Estrasburgo reside en que tumba la denominada "Doctrina Parot". Esta doctrina fue creada en 2006 por una Sentencia del Tribunal Supremo y recibe el nombre de la persona afectada por la misma. En el año 2006 surgió una gran alarma social porque en España comenzaban a terminara de cumplir sus condenas un gran número de presos de ETA y en consecuencia deberían ser excarcelados. Para solventar este problema y conseguir que los presos de ETA permaneciesen unos años más en la cárcel, en el caso Parot la Sala Segunda del Tribunal Supremo, modificó el sistema del cómputo de las penas de tal manera que aunque hubiesen sido juzgados los presos de ETA por el Código Penal de 1973 (vigente cuando cometieron sus delitos) la nueva interpretación del art. 70.2 de dicho Código

Penal por la cual la reducción de penas por trabajo, estudios, etc., se aplicarían de cara al futuro a cada una de las penas impuestas y no al plazo máximo de 30 años previsto en el art. 702 de dicho Código Penal. El fundamento del Fallo se basó en la interpretación liberal de los arts. 70.2 y 100 del Código Penal de 1973 y lo justificaron como un cambio de Jurisprudencia y en la práctica de la ejecución de las penas, sin que en su opinión ello vulnerase los arts. 14, 25.1 y 9.3 de la CE que reconocen la prohibición de discriminación, el principio de legalidad penal y la prohibición de las disposiciones sancionadoras de los derechos individuales. Esta doctrina se confirmó en posteriores sentencias y al aplicarse los beneficios penitenciarios no sobre los 30 años máximos de prisión, sino sobre cada una de las penas, cada preso juzgado conforma al Código Penal de 1973 permanecería privado de libertad 30 años. También el Tribunal Constitucional mantuvo esta doctrina en los numerosos recursos de amparo que le fueron presentados y no consideró violado el principio de legalidad penal reconocido en el artículo 25 de la CE porque la cuestión de la aplicación de las remisiones de pena por el trabajo realizado durante la estancia en prisión se refería a la ejecución de la Sentencia y no a la aplicación de una pena más severa que la prevista en la ley penal aplicable.

El Tribunal Constitucional no fue una voz unánime sobre este tema pues se formularon tres votos discrepantes, los cuales opinaban que la aplicación de la "doctrina Parot" elevaba a 45 años la pena máxima nominal en cuanto resultado de los treinta años de prisión real más los 15 años correspondientes a los trabajos realizados en prisión. Los votos particulares citan jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y ponen de manifiesto la violación del principio de legalidad (art. 25.1 de la CE), del derecho a la libertad (art. 17.1 de la CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la CE). Ni los argumentos teleológicos, ni las consideraciones de política criminal que subyacen a la doctrina Parot pueden justificar el desvío de la Jurisprudencia del TS referente a la interpretación del Código Penal de 1973 que había sido derogado. Esa salida imprevisible de la Jurisprudencia del TS (avalada por la mayoría del TC) es incompatible con el contenido esencial del derecho a la libertad.

El Convenio de Roma en su art. 7 establece que el principio de que no hay pena sin ley; principio reconocido en otros acuerdos internacionales sobre derechos humanos y componente esencial del Estado de Derecho. En base al mismo el Tribunal de Estrasburgo debe comprobar que en el momento en que una persona realizó el acto por

el que va a ser encausada y condenada haya estado vigente una disposición normativa que hizo ese acto punible; la pena impuesta no puede exceder de los límites fijados en dicha disposición. El art. 7.1 de la Convención prohíbe la aplicación retroactiva de disposiciones sancionadoras que agraven la pena. La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo debió determinar si la aplicación de la "doctrina Parot" a la demandante forma parte de la pena impuesta o del cumplimiento de la condena. El nuevo enfoque jurisprudencial afectó a la redefinición del ámbito de aplicación de la pena impuesta causando serios perjuicios a la recurrente. Por ello la Gran Sala falla que se ha producido una violación del art. 7.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos

También alegó la recurrente la violación del art. 5 del Convenio que regula el derecho a la libertad y a la seguridad y eso en base a que desde el día 3 de julio de 2008, en que debía haber salido de prisión, se le había mantenido retenida violando los requisitos de la legalidad y del procedimiento establecido por la ley. La demandante, en el momento de los hechos, no podía prever que la duración efectiva de su privación de libertad se incrementaría en nueve años debido al cambio jurisprudencial sobre el método del cómputo de penas por el trabajo. De ahí que la Gran Sala considera legal la privación de libertad hasta el 2 de julio de 2008, fecha prevista inicialmente para su liberación de la cárcel. Pero el problema está en dilucidar si el resto del tiempo que permaneció en la cárcel se adapta o no al contenido del art. 5.1 de la Convención. La aplicación de la "doctrina Parot" a la demandante prolongó su privación de libertad en nueve años por un cambio jurisprudencial que no aplicó la legislación nacional vigente en el momento de su condena, teniendo en cuenta las remisiones de penas que previamente le habían sido concedidas de conformidad con la ley.

En consecuencia, el Tribunal concluye que desde el 3 de julio de 2008 la detención de la demandante, Sra. Inés del Río Prada, ha sido ilegal incurriendo en violación del art. 5.1 del CEDH.



## **VIII/ EL PROBLEMA DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS**

El art. 44 del CEDH en su apartado primero dice que las Sentencias de la Gran Sala son definitivas y prescribe en su apartado tercero que se deben hacer públicas. A tenor del art. 46 de la Convención las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal de Estrasburgo en los litigios en que sean partes. El tema de la ejecución de las sentencias del TEDH sigue siendo uno de los problemas del Consejo de Europa y uno de los puntos más importantes de las reformas del Convenio emprendidas en el año 2000. Si se garantiza el cumplimiento de las Sentencias se reduce el número de asuntos que se presentan ante el TEDH y se consagra el principio de subsidiariedad en cuanto base del sistema europeo de protección de los derechos humanos. Además, tampoco podemos olvidar que las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo cumplen una función objetiva cuando desarrollan y definen el contenido de los derechos reconocidos en el Convenio; esta función se completa de forma subjetiva cuando se otorga justicia en el caso concreto en el que un ciudadano de un Estado miembro del Consejo de Europa, después de haber agotado todos los recursos internos en su país, llega al Tribunal de Estrasburgo buscando la reparación definitiva de la vulneración de sus derechos.<sup>33</sup>

Las medidas generales que el TEDH indica a los Estados para dar pleno cumplimiento a sus sentencias tienen como objetivo evitar que se repita el acto que ha supuesto la violación del derecho del demandante. Este problema presenta en España cierta singularidad porque el derecho español reconoce efecto directo a las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo. De ahí que el Gobierno de España de forma reiterada ha señalado al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el órgano encargado de controlar la ejecución de las sentencias del TEDH, que el sistema jurídico español ofrece suficientes garantías para no repetir el acto que originó la vulneración de un derecho reconocido en el CEDH, pues la jurisprudencia del TEDH forma parte del derecho español.

---

33 LIÑAN NOGUERAS, D.: "Efectos de las sentencias del TEDH y Derecho Español" *REDI*, nº 2, 1985, págs. 355 y ss.

Sucedía que España, al igual que otros países miembros del Consejo de Europa carecían de mecanismos legales para la correcta ejecución de dichas Sentencias. Hasta fechas recientes el derecho español no había desarrollado normas jurídicas ni prácticas judiciales para facilitar la reapertura de los procesos internos a causa de una Sentencia del Tribunal de Estrasburgo; esta inseguridad hizo que de manera reiterada la doctrina y los tribunales españoles hayan reclamado una solución legislativa que fije los cauces procesales adecuados para asegurar en España la ejecución de las Sentencias del TEDH.<sup>34</sup>

El Consejo de Estado Español, en un informe del año 2008, señaló que: "Se prevea un mecanismo específico, en el que sea el Tribunal Supremo quien deba decidir sobre la reapertura de los procesos cuestionados y, en su caso, revisar por sí mismo la sentencia o, si ello no fuere posible en atención a la naturaleza de la violación apreciada, declarar la nulidad de las actuaciones y reenviar el asunto al órgano jurisdiccional en el que se produjo la violación".

El legislador español aportó una solución jurídica a este problema al introducir el art. 5 Bis en la LOPJ en la reforma experimentada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio que al respecto dice: "Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión".

En un sentido similar está redactado el art. 954.3 de la LECrim (reformado por Ley 41/2015 de 5 de octubre); también la LECivil en sus arts. 510.2, 511 y 512 tras la reforma introducida por la LO 7/2015 de 21 de julio, con entrada en vigor el 1 de

---

34 BUJOSA VADELL, L.: *Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español*, Tecnos, Madrid, 1997.

octubre de 2015. Y el art. 102.2 de la LJCA reformada también por la LO 7/2015, de 21 de julio.

De lo previamente expuesto deducimos que en España el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo es la vía que se ha adoptado para resolver el problema de la ejecución de las sentencias del TEDH. Pero, sin restar méritos a esta solución, se hace necesaria la creación de algún cauce procesal que sea homogéneo a todos los Estados parte del Consejo de Europa y para ello lo más acertado sería adoptar algún Protocolo al CEDH que clarifique los efectos de las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo y que vaya más allá de la recomendación del Comité de Ministros del año 2000. De esta forma se atribuiría de forma expresa el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en materia de Derechos Humanos, a un Tribunal supranacional que entre sus funciones tiene la de prefijar el orden público europeo.

#### **VIII.1. A título de ejemplo: la Sentencia del Tribunal Supremo 848/2017, Sala de lo Penal, de 22-II-2017**

Con fecha 15 de noviembre de 2015 se presentó en el Registro General del TS un escrito interponiendo recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid de 20/1/06 dictada en apelación en el Rollo 774/05 que estimando el recurso interpuesto por la representación de la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal... condena al solicitante como autor de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con un delito contra la Hacienda Pública (art. 305,a) del Código Penal. Para la interposición de este recurso extraordinario de revisión el recurrente se basa en el art. 954.4º LECrim y en el Acuerdo del Pleno de la Sala II del TS de 21/10/2014 y alega que habiendo interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y habiendo sido éste inadmitido por Providencia de 17/10/07..., con fecha 23 de abril de 2008 interpuso demanda 21460/08 contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... dictándose Sentencia el 13 de diciembre de 2011 declarando por unanimidad admisible la demanda por haber existido violación del art. 6.1 del Convenio. Conformada a dicha Sentencia de Estrasburgo y a su contenido, promovió incidente de nulidad de actuaciones ante la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, al que se opusieron el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, dictándose auto de inadmisión a trámite el 14 de julio de 2014. Contra dicha resolución interpuso el 23-IX-2014 recurso

de amparo ante el Tribunal Constitucional que con fecha 23-II-2015 acordó uno admitirlo a trámite teniendo en cuenta la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entiende que procede admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto dada la existencia de una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se le reconoce al recurrente que ha sufrido la violación del art. 6.1 del Convenio de Roma al haber sido condenado por la Audiencia Provincial sin haber sido oído previamente. El recurso se apoya jurídicamente en el art. 954.4º LECrim. En relación a la eficacia que han de tener en el derecho español las Sentencias del TEDH desde los Autos de 29 de abril de 2004, 21 de octubre de 2004 del TS, la Sala de lo Penal ha entendido que la vía a utilizar es el recurso de revisión, dentro de la regulación procesal actual y así lo permite una amplia interpretación del art. 954.4 de la LECrim. Esto facilita la unificación de doctrina en materia de seguridad jurídica. También el Tribunal Constitucional (Sentencia 10-X-2005) entendió que el recurso de revisión era el medio idóneo para lograr la efectividad de los pronunciamientos del TEDH cuando aprecie vulneración del Convenio Europeo. El Tribunal Supremo, en su reunión de 21 de octubre de 2014 (Sala de lo Penal) en una reunión del Pleno no jurisdiccional abordó el tema de la efectividad de las Sentencias del TEDH y acordó que hasta que en el ordenamiento jurídico español no hubiese una previsión legal al respecto el recurso de revisión del art. 954 de la LECrim cumple dicho cometido.

Posteriormente se modificó el art. 954 por la Ley 41/2015 de 5 de octubre que entró en vigor el pasado 6 de diciembre y a cuyo contenido nos hemos referido en el apartado anterior. Para interponer el recurso extraordinario de revisión está legitimada la persona que ha sido demandante ante el TEDH y el plazo de solicitud es de un año desde que adquirió firmeza la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Ahora bien, dicha modificación no es de aplicación al caso comentado porque la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 estableció que: "Esta Ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor".

Sin embargo el TS en el Fundamento Segundo Jurídico de la Sentencia argumenta que el recurso extraordinario de revisión se fundamenta en constatar la

existencia de algún hecho nuevo que modifica la resolución judicial previa. En este caso la Sentencia del TEDH supone una evidencia de que al condenado recurrente se le vulneró su derecho a la defensa. Poniendo en relación la precitada Sentencia con el objeto del recurso de revisión (la anulación de la condena) procede estimar dicho recurso y declarar la nulidad de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que condenó al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento público, dejando sin efecto los pronunciamientos de la sentencia a la que se refiere la revisión que se solicita.

## **IX/ CONCLUSIONES**

Llegados a este punto es conveniente que realicemos un apunte a modo de conclusión. En el mundo en que nos ha tocado vivir, con una crisis generalizada y un descenso de los valores democráticos que se aprecia de forma evidente es ahora aún más necesario volver la mirada hacia el tema de los derechos humanos que cada vez corren nuevos y mayores peligros. Los derechos que le corresponden al ser humano por el mero hecho de haber nacido hombre son un discurso bastante reciente. Intentando protegerlos, en su proceso evolutivo, no han sido ya sólo las Constituciones las normas jurídicas donde han sido reconocidos, sino que tras la Segunda Guerra Mundial se apreció la necesidad del reconocimiento de dichos derechos en Declaraciones y Tratados Internacionales. Destacan los Tratados aprobados por la ONU y su intención por lograr una eficacia universal de dichos derechos. De ahí se descendió a un proceso de regionalización de los mismos existiendo en la actualidad el sistema americano, el africano y el europeo.

El proceso de regionalización del reconocimiento de derechos en el viejo continente europeo se dio en el seno del Consejo de Europa. La intención de los países fundadores consistía en evitar que se volvieran a vulnerar dichos derechos en la misma medida que lo habían sido en la primera mitad del siglo XX. De ahí que se elaborase y aprobase el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1950. Recibe también el nombre de Tratado de Roma por ser esta ciudad el lugar donde se firmó. Lo más destacable de este Tratado Internacional –cuyos derechos coinciden prácticamente con los de la Carta de la ONU– es que se creó un Tribunal de Justicia para velar por el respeto del contenido de los derechos

reconocidos en dicho Tratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y ante él pueden acudir los ciudadanos de los 47 Estados parte del Convenio que hayan visto vulnerados los derechos reconocidos en el Tratado por los poderes públicos de su Estado. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad que regula estas actuaciones ante el Tribunal de Estrasburgo hay que agotar previamente la vía jurisdiccional interna para que prospere la demanda ante dicho tribunal internacional.

Es de destacar también el carácter vinculante de las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo, con el objetivo de que el reconocimiento de los derechos no quede vaciado de contenido. Pero no existe un instrumento unificado para hacer cumplir dichas resoluciones. Son los Estados firmantes del Convenio los encargados de dicho cumplimiento y de crear las vías internas al respecto. En España desde el año 2015 y tras la correspondiente modificación legislativa se ha implantado el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo como la vía judicial interna para la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo. A pesar de este avance, que no es despreciable, la doctrina clama por un procedimiento aprobado en el seno del Consejo de Europa que uniformice el modo de ejecutar las Sentencias de Estrasburgo. Con ello se implementaría el contenido del derecho de la Convención y la efectividad de sus garantías.

## BIBLIOGRAFÍA

### MONOGRAFIAS Y OBRAS COLECTIVAS

- AA.VV. *La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole n° 11*. Bruylant, Bruxelles, 1999.
- ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R.: *Derecho Constitucional*. 6ª ed. Ed. Tecnos, 2016.
- ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, M.P.: "Consejo de Europa y derechos humanos: desarrollos recientes", *XVI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, Andorra, 1995.
- BUJOSA VADELL, L.: *Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español*. Ed. Tecnos, Madrid, 1997.
- CASSESE, A.: *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo*. Ed. Ariel, 1993.
- CASSIN, R.: "La Déclaration universelle et la mise en œuvre des Droits de l'homme". *RCADI*, vol. 79.
- DÍAZ CREGO, M.: *"La Europa de los derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos"*, (GARCÍA ROCA y SANTOLAYA, coord.), Madrid, CEPyC, 2005.
- FERNÁNDEZ LIESA, C.: *El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica*. Ed. Civitas, Thomson Reuters. Aranzadi, 2013.
- GARCÍA ROCA, J.: *"La evolución del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en AA.VV. Historia de los Derechos Humanos en el siglo XX*.
- GARCÍA ROCA, J.: "El margen de apreciación nacional en la interpretación del CEDH: Soberanía e integración". *Cuadernos Civitas*, Thomson Reuters, 2010.
- MARTÍN RETORTILLO, L.: *La Europa de los derechos humanos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, Madrid, 1998.
- MORTE GÓMEZ, C.: *El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los requisitos de admisibilidad de la demanda*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

PÉREZ LUÑO, A.E.: *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*. Ed. Tecnos, 9ª edición.

- *Los derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Ed. Tecnos, 2005.

- *Los derechos fundamentales*. Temas clave de la C.E. Ed. Tecnos, Madrid 1984.

RIPOLL CARULLA, S.: *El sistema europeo de protección de los derechos humanos y el Derecho Español*. Ed. Atelier, libros jurídicos, Barcelona, 2007.

RIPOLL CARULLA, S y otros: *España en Estrasburgo. Tres décadas bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*. Thomson Reuters, 2010.

ROBERTSON, A.H.: *Le Conseil de l'Europe. Sa structure, ses fonctions et ses réalisations*. Leiden, Sijhoff, 1999.

TRUYOL y SERRA, A.: *Los derechos humanos. Declaraciones y Convenios Internacionales: Estudio Preliminar*. Ed. Tecnos, Madrid, 1984.

## ARTICULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

FIGUERUELO BURRIEZA, Á.: "Diálogo entre Tribunales: la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21-X-2013 (caso Sra. Del Río Prada contra el reino de España)" en *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, nº 23, Madrid, 2014.

LIÑAN NOGUERAS, D.: "Efectos de las sentencias del TEDH y Derecho Español". *Revista Española de Derecho Internacional*, nº 2, 1985.

MONTES FERNÁNDEZ, F.J.: "El Consejo de Europa", en *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*; vol. 47, 2014.

MORENILLA RODRÍGUEZ, J.A.: "La ejecución de las sentencias del TEDH". *Revista del Poder Judicial*, nº 15, Madrid 1990.

OSUNA PATIÑO, N.: "Apuntes sobre el concepto de derechos fundamentales", nº 37, *Temas de Derecho Público*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996.



PÉREZ MANZANO, M.: "El TC ante la tutela multinivel de derechos fundamentales en Europa", *Revista Española de Derecho Constitucional*, nº 95, Madrid, 2012.

RUILOBA ALVARIÑO, J.: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: organización y funcionamiento". *UNED. Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica*, nº 1, 2006.